



Title of Deliverable	Activity Name
<p>Legal texts to operationalize system for secured transactions (RUG) <i>(Operationalizing Guarantees)</i></p>	<p>Improving the system for secured transactions</p>
Abstract	Counterpart
<p>Context: Current laws and initiatives do not contain efficient procedural rules on how to execute guarantees based personal property registered under the system for secured transactions (RUG, for its acronym in Spanish), nor the judges obligation to execute them.</p> <p>MEPP has drafted legal texts to operationalize this system mainly covering the following points:</p> <ul style="list-style-type: none">• Obligation of the Federal Judicial System to observe the secured transactions registry.• Judges obligation to obtain a lien certificate and register secured transactions in accordance with the credit priority. <p>Keywords: secured transactions, Mexican Federal Judicial System.</p>	<p>Ministry of Economy (SE)</p>
	MEPP Partner/ Author
	<p>EY</p>
	Date
<p>June 2014</p>	



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

MEXICO

Resumen Ejecutivo ***Registro Único de Garantías*** ***Mobiliarias (RUG).***

Julio de 2014.

Índice

Contexto y contenido del documento	3
Antecedentes.....	4
Problemática.....	5
Propuesta.....	6

Contexto y contenido del documento

El presente documento fue elaborado como parte del Programa de Política Económica para México (PROPEM) el cual es financiado por la Agencia para el Desarrollo Internacional del Gobierno de los Estados Unidos (USAID), y su objetivo es asesorar a instituciones públicas de México en el diseño e implementación de políticas públicas enfocadas a temas económicos con el fin de incrementar la competitividad del país a nivel internacional. En específico el presente reporte corresponde al proyecto “Registro Único de Garantías Mobiliarias (RUG)”, y el cual tiene el objetivo de realizar un análisis de las normas legales y reglamentarias que regulen la ejecución de las garantías mobiliarias, a efecto de poder proponer reformas necesarias para hacer exigible a los jueces, el análisis, registro y verificación de la existencia o no de garantías mobiliarias involucradas en los juicios en trámite, así como su ejecución más eficiente y de observancia obligatoria para el Poder Judicial.

El proyecto fue llevado a cabo a través de un análisis de las eficiencias y deficiencias del RUG mediante entrevistas con el personal del RUG, de la Secretaría de Economía, del Poder Judicial, con abogados especializados en materia de registro de garantías mobiliarias. Posteriormente se llevó a cabo un análisis de todo el ordenamiento legal para definir en qué leyes y/o reglamentos sería necesario establecer la obligación de los jueces de consultar el RUG, obtener un certificado de gravamen y registrar las garantías mobiliarias de los bienes de los juicios de los que sean parte. Por último se realizó un modelo de propuesta de iniciativa de reformas a las leyes y reglamentos para determinar la prelación de créditos, establecer el registro de las garantías mobiliarias y ejecutar las garantías mobiliarias.

El proyecto buscaba llevar a cabo los siguientes productos de trabajo:

1. Reporte con los resultados de las reuniones sostenidas con el personal del RUG, la Secretaría de Economía, abogados especializados, y el Poder Judicial
2. Reporte con las conclusiones de las eficiencias y deficiencias del RUG
3. Reporte con los resultados del análisis de todo el ordenamiento legal para determinar las leyes en las que será necesario establecer la obligación de los jueces de consultar el RUG, obtener un certificado de gravamen, y registrar las registrar garantías sobre bienes muebles que sean parte de juicios de los que tengan conocimiento
4. Reporte con el modelo de propuesta de iniciativa de reformas a los artículos de las leyes y reglamentos en los que será necesario establecer la obligación de los jueces de consultar el RUG, obtener un certificado de gravamen, y registrar las registrar garantías sobre bienes muebles que sean parte de juicios de los que tengan conocimiento
5. Reporte con el modelo de propuesta de iniciativa de reformas a las reglas procesales, a efecto de hacer ejecutables las garantías establecidas sobre bienes muebles, aplicando las garantías constituidas para el pago de acreedores, a efecto de poder recuperar de forma breve los derechos preferentes que tengan las PYMES sobre dichas garantías
 - Anexo A. Análisis del ordenamiento legal para establecer la obligación de los jueces de revisar el RUG
 - Anexo B. Análisis del ordenamiento legal para establecer la prelación de los créditos

El presente reporte, titulado *Resumen Ejecutivo*, específicamente cubre los entregables 2 y 3 arriba mencionados, y busca explicar las conclusiones en relación a las eficiencias y deficiencias del Registro Único de Garantías Mobiliarias (RUG), así como expresar los resultados del análisis del sistema legal que se llevó a cabo con el objetivo de determinar las leyes en las que era necesario establecer la obligación de los jueces

de consultar el RUG, obtener un certificado de gravamen, así como registrar las garantías mobiliarias de los bienes que sean parte de los juicios de los que tengan conocimiento. El documento está estructurado en tres partes: antecedentes, problemática y propuesta.

Resumen Ejecutivo

“Registro Único de Garantías Mobiliarias”

Antecedentes

Con las reformas a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito de 2000 y 2003, así como las relativas al Código de Comercio en sus artículos 141 Bis al 1414 Bis-20, se establecieron dos procedimientos especiales: uno judicial y otro extrajudicial para la ejecución de bienes muebles otorgados en (i) prenda sin transmisión de posesión, o bien (ii) afectados en fideicomiso en garantía. Con todo ello se pretendió establecer un sistema de ejecución de garantías mobiliarias que fuera una vía ágil vía de pago ante el incumplimiento del deudor prendario o del fideicomitente deudor.

Sin embargo, en esas fechas no existía un Registro Público Nacional en el cual pudieran inscribirse todas las garantías mobiliarias constituidas. En razón de ello, los acreedores no podían oponer con seguridad sus derechos de crédito a terceros a nivel nacional, ni éstos tenían certeza de que el bien mueble objeto de la garantía estuviera libre de gravámenes, anotaciones preventivas o definitivas, pues para ello era necesario consultar cada una de las oficinas registrales en las treinta y un entidades federativas y en el Distrito Federal, con los inconvenientes que eso representaba.

No fue sino hasta el año de 2009 que nació el Registro Único de Garantías Mobiliarias (en adelante “RUG”), regulado desde entonces en los artículos 32 Bis-1 a 32 Bis-9 del Código de Comercio, cuya institucionalización generó una mayor certeza de los derechos de crédito garantizados con bienes muebles, pues al ser de consulta inmediata, en línea, único, nacional, gratuito y de fácil accesibilidad, dio paso a una mayor publicidad de las garantías otorgadas en prenda sin transmisión de posesión o fideicomiso de garantía.

Pese a dicho avance registral, los procedimientos especiales de ejecución de garantías mobiliarias tanto judicial como extrajudicial siguen desvinculados de la regulación legal del RUG, pues ni al iniciarse los mismos, ni durante el procedimiento, ni menos en la adjudicación directa o venta del bien mueble a terceros se impone la obligación al ejecutante de verificar los derechos inscritos de otros acreedores en el registro nacional.

Así, ni a la fiduciaria que lleva acabo la ejecución extrajudicial, ni tampoco al juzgador se les exige cerciorarse de ello en los procedimientos respectivos, dado que no existe dispositivo legal alguno que establezca la obligación de consultar al RUG en ningún momento de la ejecución de garantías mobiliarias, teniendo repercusiones a corto, mediano y largo plazo.

Problemática

Es así que el nacimiento del RUG en 2009, no trajo acompañada ninguna reforma o adición a los artículos 1414 Bis a 1414 Bis-20 del Código de Comercio para imponer al ejecutante la obligación de llamar a otros acreedores al procedimiento y que pudieran tener un derecho preferente respecto de un bien mueble, lo que mantiene permanentemente un conflicto latente contra los terceros que pudieran tener inscrito un derecho con antelación ante el RUG.

Sin embargo, desde el momento de creación del Registro Único de Garantías Mobiliarias, se dio un paso importante y necesario para la modernización del sistema financiero y aún más, para el fortalecimiento de un sistema de garantías eficiente. Esta teoría fundamentalmente se basa en tres pilares: (i) Leyes diseñadas para fomentar el acceso al crédito, (ii) Registros Públicos ágiles y a menor costo y (iii) Ejecución rápida y efectiva.

Recordemos que el sistema de garantías mobiliarias es el conjunto de reglas, instituciones y procesos relacionados con el financiamiento garantizado con bienes muebles, que permiten reducir el riesgo crediticio y con ello, aumentar la oferta crediticia en mejores condiciones.

El primero de estos tres pilares consiste en el conjunto de normas jurídicas que establezcan claramente y que incentiven el otorgamiento del crédito garantizado mediante bienes muebles, la claridad en las reglas de prioridad en caso de contienda entre acreedores, incluyendo el caso del concurso mercantil, así como cierta uniformidad en el perfeccionamiento, registro y ejecución de las mismas. Esto último para entidades financieras que otorgan créditos en diversas jurisdicciones, ganando previsibilidad en los proyectos que financian.

El segundo pilar consiste en registros públicos ágiles, a bajo costo y de fácil consulta, para que las garantías mobiliarias gocen de publicidad en el sentido informático y jurídico de la palabra. Esto es que las garantías y gravámenes pueden ser conocidos por cualquier persona que consulte el registro, aprovechando el uso de las tecnologías de la información más avanzadas, permitiendo con ello la eliminación de asimetrías de información en las operaciones de comercio. Por ejemplo, el descubrimiento de gravámenes no declarados sobre ciertos bienes muebles en materia de una operación mercantil. Incentivo jurídico para que una garantía mobiliaria surta efectos frente a terceros, materializando el principio “el primero en tiempo, primero en derecho”.

El tercer pilar consiste en un procedimiento de ejecución de garantías mobiliarias que sea expedito, efectivo y lo menos costoso posible, entendiendo por ello, el logro de la reposición de los bienes materia de la garantía, su remate y pago oportuno en favor del acreedor, en condiciones constitucional y legalmente consistentes.

Al conformarse un marco legal que atienda estos tres pilares, es posible construir un verdadero sistema de garantías mobiliarias eficiente, con lo cual se alcancen los objetivos de reducción de riesgo crediticio, y con

ello se logre aumentar la oferta crediticia en nuestro país, así como una mejora en las condiciones del financiamiento.

Así, teniendo un sistema de garantías mobiliarias eficaz, es posible atender al sector económico más importante de nuestro país, es decir, a las MyPymes, haciendo llegar una mayor cantidad de recursos a estas unidades económicas y productivas, a través del crédito en condiciones sanas y competitivas.

El uso del RUG por parte de los jueces, tanto del ámbito federal como en las diversas Entidades Federativas, es trascendental para el RUG debido a que el éxito del sistema de garantías mobiliarias eficaz depende en gran medida de la ejecución pronta y expedita por parte de nuestros tribunales y juzgados. Como hemos visto, el Poder Judicial conforma el tercer pilar necesario para lograr los objetivos de todo nuestro sistema de garantías mobiliarias, por lo cual es sumamente importante que los jueces conozcan su funcionamiento y adecuen sus prácticas al uso y operación del RUG, con la posibilidad de que sean los propios jueces quienes lo utilicen de manera directa realizando anotaciones o cualquier tipo de asiento registral.

Es importante mencionar que a efecto de hacer las modificaciones necesarias en el RUG, para eficientar el sistema, el 12 de octubre de 2012, el Diputado del PAN José Arturo Salinas, presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio; y de las Leyes General de Sociedades Mercantiles, de Sociedades de Inversión, General de Títulos y Operaciones de Crédito, Federal de Derechos y Orgánica de la Administración Pública Federal. En dicha Iniciativa de reforma se contiene un apartado específico para el “Registro Único de Garantías Mobiliarias” que tiene como propósito hacer más sólido el registro de garantías a través de reglas simples y básicas para su uso, ampliación de oportunidades y el establecimiento una prelación de créditos garantizados.

Sin embargo, dentro de dicha reforma no se contemplaron reglas procedimentales eficientes que establezcan el cómo se pueden ejecutar las garantías que recaigan sobre bienes muebles y que estén debidamente inscritas en el RUG, así como la obligatoriedad que deberán observar los juzgadores para consultar el RUG e inscribir las garantías mobiliarias que formen parte de un juicio del que conozcan, para con ello coadyuvar a la debida ejecución de las mismas.

Así, al no encontrarse claramente vinculadas las garantías otorgadas e inscritas en el RUG con el ejercicio de los derechos procesales, para el caso de una controversia los bienes no se constituyen en auténticas garantías de fácil y eficiente ejecución.

Propuesta

En virtud de todo lo anteriormente expuesto, la intención del presente proyecto será proponer un esquema que permita tener un procedimiento en el que los jueces se encuentren obligados a consultar el RUG, registrar las garantías mobiliarias que forman parte de los juicios de los que conozcan, y con ello, mejorar su ejecución al otorgarle una correcta prelación de dichos créditos.

Por ello, se hizo un análisis a las normas legales y reglamentarias que regulan la ejecución de las garantías mobiliarias, a efecto de poder proponer las modificaciones y adecuaciones necesarias para hacer exigible a los jueces, el análisis, registro y verificación de la existencia o no de garantías mobiliarias involucradas en los juicios en trámite, así como su ejecución más eficiente y de observancia obligatoria para el Poder Judicial.

Las legislación analizada para corroborar los cambios necesarios para implementar el tercer pilar del RUG en cuanto a la ejecución de las garantías mobiliarias son el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, Código Civil para el Distrito Federal, Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Código de Comercio, Código Civil Federal, Código Federal de Procedimientos Civiles, Ley de Concursos Mercantiles y Código Fiscal de la Federación.

Dichas modificaciones, resultan de vital importancia ya que el Poder Judicial es el tercer pilar para poder lograr los objetivos de todo el sistema de garantías mobiliarias, ya que es de suma importancia que los jueces conozcan su funcionamiento y adecuen sus prácticas al uso y operación del RUG.

Al respecto, es de suma importancia señalar que las modificaciones propuestas a los textos legales se hicieron de la siguiente manera:

a) Nivel Federal: Las propuestas realizadas a las leyes federales, a saber, el Código de Comercio, Código Civil Federal, Código Federal de Procedimientos Civiles, Ley de Concursos Mercantiles y Código Fiscal de la Federación, se contienen en el documento anexo al presente, denominado “Modificaciones legales para el funcionamiento del RUG”.

La modificación de las Leyes antes mencionadas, tiene como efectos legales el mejoramiento del funcionamiento del RUG derivado de la naturaleza misma de los ordenamientos legales modificados,

b) Nivel estatal: En el documento denominado “Modificaciones legales para el funcionamiento del RUG”, se realizaron propuestas de reformas legales a las leyes del Distrito Federal, ya que se tomó a éste como modelo para efecto de realizar las propuestas.

Derivado de lo antes mencionado, es evidente que la implementación de dichas propuestas únicamente repercutirá en el funcionamiento del RUG en el Distrito Federal; es decir, para el funcionamiento del RUG en otros Estados, es necesario que se busque la legislación análoga o los dispositivos legales que regulen situaciones jurídicas similares y, que sobre éstos se realicen las modificaciones propuestas en el modelo, para que se pueda llevar a cabo la mejora en el funcionamiento del RUG en los diversos Estados de la República Mexicana.

Es importante señalar, que el presente proyecto incluye un modelo de propuesta de iniciativa legal con reformas a las leyes procesales, en la que se ha establecido la obligación de los jueces para obtener un certificado de gravamen y registrar las garantías que se establezcan sobre bienes muebles que sean parte de un juicio del que tengan conocimiento. Asimismo, dichas reformas efficientan el procedimiento para su ejecución, al tener de forma precisa una prelación de créditos para el pago de acreedores derivado de la obligación de consultar y registrar las garantías que sean parte de un juicio.

De no efectuarse dicho cambio, tendría como consecuencia lógica e inmediata el que se vulneraran derechos de crédito inscritos en favor de otros acreedores que no serán llamados a dicho procedimiento en donde se ejecuta un bien mueble sobre el que pudieran tener un grado de prelación anterior al del propio ejecutante.

Es decir, se podría llegar a concluir el juicio con sentencia sin que el juez advirtiera la existencia de un crédito sobre el mismo bien mueble, resultando necesario el establecimiento en un dispositivo legal la obligación al ejecutante de consultar la base de datos del RUG.

Por tanto, el presente proyecto tiene como objetivo, el establecer una carga procesal al ejecutante de acompañar una constancia del RUG para verificar el grado de prelación de su crédito y el derecho de otros acreedores que tengan algún embargo en ulterior grado, estableciendo a su vez, la obligación al juzgador de exigirlo, como sucede en tratándose de bienes inmuebles, en donde se exige acompañar el certificado relativo a efecto de llamar a los demás acreedores.

Es clara entonces la deficiencia legal que existe para el tema de ejecución de garantías mobiliarias, pues pudiera dejarse inaudito a un tercero, provocando la interposición de futuros amparos por violación a su garantía y derecho humano de audiencia.

Por ello, se considera que la reforma propuesta constituye un avance para la mayor protección y certeza jurídica de los acreedores que verán inscritos sus derechos de crédito en tal registro nacional. Sin embargo, los procedimientos especiales de ejecución de garantías mobiliarias tanto judicial, como extrajudicial, siguen desvinculados de la regulación legal del RUG, pues ni al iniciarse tal etapa compulsiva, ni durante el procedimiento, ni menos en la adjudicación directa o venta del bien mueble a terceros, se impone la obligación al ejecutante de verificar los derechos inscritos de otros acreedores en el registro nacional, ni tampoco al juzgador se le exige cerciorarse de ello en los procedimientos judiciales seguidos ante él; es decir, no existe dispositivo legal alguno que establezca la obligación de consultar el RUG en ningún momento, por lo que resulta adecuado el proyecto aquí planteado para cumplir con los tres pilares necesarios respecto al tema del registro de garantías mobiliarias.

***Reporte con el modelo de propuesta de iniciativa de
reformas para el funcionamiento del RUG
Registro Único de Garantías Mobiliarias (RUG).***

Julio 2014.

Índice

Contexto y contenido del documento	3
Modelo de propuesta de iniciativa de reforma	4
Modificaciones al Código de Comercio.....	4
Modificaciones a la Ley de Concursos Mercantiles	7
Modificaciones al Código Federal de Procedimientos Civiles.....	10
Modificaciones al Código Fiscal de la Federación.....	11
Modificaciones al Código Civil Federal	12
Modificaciones al Código Civil para el Distrito Federal	13
Modificaciones al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal	14
Modificaciones a la Ley Órganica Del Tribunal Superior De Justicia Del Distrito Federal	15

Contexto y contenido del documento

El presente documento fue elaborado como parte del Programa de Política Económica para México (PROPEM) el cual es financiado por la Agencia para el Desarrollo Internacional del Gobierno de los Estados Unidos (USAID), y su objetivo es asesorar a instituciones públicas de México en el diseño e implementación de políticas públicas enfocadas a temas económicos con el fin de incrementar la competitividad del país a nivel internacional.

En específico el presente reporte corresponde al proyecto “Registro Único de Garantías Mobiliarias (RUG)”, y el cual tiene el objetivo de realizar un análisis de las normas legales y reglamentarias que regulen la ejecución de las garantías mobiliarias, a efecto de poder proponer reformas necesarias para hacer exigible a los jueces, el análisis, registro y verificación de la existencia o no de garantías mobiliarias involucradas en los juicios en trámite, así como su ejecución más eficiente y de observancia obligatoria para el Poder Judicial.

El proyecto fue llevado a cabo a través de un análisis de las eficiencias y deficiencias del RUG mediante entrevistas con el personal del RUG, de la Secretaría de Economía, del Poder Judicial, con abogados especializados en materia de registro de garantías mobiliarias. Posteriormente se llevó a cabo un análisis de todo el ordenamiento legal para definir en qué leyes y/o reglamentos sería necesario establecer la obligación de los jueces de consultar el RUG, obtener un certificado de gravamen y registrar las garantías mobiliarias de los bienes de los juicios de los que sean parte. Por último se realizó un modelo de propuesta de iniciativa de reformas a las leyes y reglamentos para determinar la prelación de créditos, establecer el registro de las garantías mobiliarias y ejecutar las garantías mobiliarias.

El proyecto buscaba llevar a cabo los siguientes productos de trabajo:

1. Reporte con los resultados de las reuniones sostenidas con el personal del RUG, la Secretaría de Economía, abogados especializados, y el Poder Judicial
2. Reporte con las conclusiones de las eficiencias y deficiencias del RUG
3. Reporte con los resultados del análisis de todo el ordenamiento legal para determinar las leyes en las que será necesario establecer la obligación de los jueces de consultar el RUG, obtener un certificado de gravamen, y registrar las registrar garantías sobre bienes muebles que sean parte de juicios de los que tengan conocimiento
4. Reporte con el modelo de propuesta de iniciativa de reformas a los artículos de las leyes y reglamentos en los que será necesario establecer la obligación de los jueces de consultar el RUG, obtener un certificado de gravamen, y registrar las registrar garantías sobre bienes muebles que sean parte de juicios de los que tengan conocimiento
5. Reporte con el modelo de propuesta de iniciativa de reformas a las reglas procesales, a efecto de hacer ejecutables las garantías establecidas sobre bienes muebles, aplicando las garantías constituidas para el pago de acreedores, a efecto de poder recuperar de forma breve los derechos preferentes que tengan las PYMES sobre dichas garantías
 - Anexo A. Análisis del ordenamiento legal para establecer la obligación de los jueces de revisar el RUG
 - Anexo B. Análisis del ordenamiento legal para establecer la prelación de créditos

El presente reporte, titulado *Reporte con el modelo de propuesta de iniciativa de reformas para el funcionamiento del RUG*, específicamente cubre los entregables 4 y 5 arriba mencionados, y contiene la propuesta con las modificaciones legales para el establecimiento de la obligación de los jueces de consultar el RUG, obtener un certificado de gravamen, registrar las garantías sobre bienes muebles que sean parte de juicios de los que tengan conocimiento, así como reformas a las reglas procesales a efecto de hacer ejecutables las garantías establecidas sobre bienes muebles.

Modelo de propuesta de iniciativa de reformas para el funcionamiento del RUG

CÓDIGO DE COMERCIO				
Artículo	Ordenamiento Jurídico	Texto vigente	Reforma sugerida	Observaciones
32 bis 8	Código de Comercio	<p>Las normas reglamentarias del Registro desarrollarán, entre otros:</p> <p>I. Los procedimientos y requisitos técnicos y operativos con motivo de inscripciones, anotaciones, certificaciones y consultas que se lleven a cabo;</p> <p>II. Las características de las formas precodificadas para la inscripción y anotación en el Registro;</p> <p>III. Los criterios de clasificación de las distintas garantías, así como de los bienes afectos a las mismas;</p> <p>IV. El procedimiento para la renovación de las inscripciones;</p> <p>V. Los procedimientos y requisitos para la rectificación, modificación o cancelación de la información del Registro, y</p> <p>VI. Cualquier otro dato, requisito, procedimiento o condición necesarios para la adecuada operación del Registro.</p>	<p>Las normas reglamentarias del Registro desarrollarán, entre otros:</p> <p>I. Los procedimientos y requisitos técnicos y operativos con motivo de inscripciones, anotaciones, certificaciones y consultas que se lleven a cabo;</p> <p>II. Las características de las formas precodificadas para la inscripción y anotación en el Registro;</p> <p>III. Los criterios de clasificación de las distintas garantías, así como de los bienes afectos a las mismas;</p> <p>IV. El procedimiento para la renovación de las inscripciones;</p> <p>V. Los procedimientos y requisitos para la rectificación, modificación o cancelación de la información del Registro, y</p> <p>VI. Cualquier otro dato, requisito, procedimiento o condición necesarios para la adecuada operación del Registro.</p>	

			<p><u>VII. La obligación de los jueces de consultar el Registro Único de Garantías Mobiliarias antes de iniciar el procedimiento de ejecución respecto de un bien mueble, para efecto de verificar la prelación de derechos que existen respecto del mismo.</u></p>	
1414 bis 7	Código de Comercio	<p>Se tramitará de acuerdo a este procedimiento todo juicio que tenga por objeto el pago de un crédito cierto, líquido y exigible y la obtención de la posesión material de los bienes que lo garanticen, siempre que la garantía se haya otorgado mediante prenda sin transmisión de posesión, o bien, mediante fideicomiso de garantía en que no se hubiere convenido el procedimiento previsto en el artículo 403 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.</p> <p>Para que el juicio se siga de acuerdo con las disposiciones de este Capítulo, es requisito indispensable que el mencionado crédito conste en documento público o escrito privado, según corresponda, en términos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y que sea exigible en los términos pactados o conforme con las disposiciones legales aplicables.</p>	<p>Se tramitará de acuerdo a este procedimiento todo juicio que tenga por objeto el pago de un crédito cierto, líquido y exigible y la obtención de la posesión material de los bienes que lo garanticen, siempre que la garantía se haya otorgado mediante prenda sin transmisión de posesión, o bien, mediante fideicomiso de garantía en que no se hubiere convenido el procedimiento previsto en el artículo 403 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.</p> <p>Para que el juicio se siga de acuerdo con las disposiciones de este Capítulo, es requisito indispensable que el mencionado crédito conste en documento público o escrito privado, según corresponda, en términos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y que sea exigible en los términos pactados o conforme con las disposiciones legales aplicables.</p>	

<p>1414 bis 8</p>	<p>Código de Comercio</p>	<p>Presentado el escrito de demanda, acompañado del contrato respectivo y la determinación del saldo que formule el actor, y cuando el promovente sea una institución de crédito, anexando la certificación de saldo que corresponda, el juez bajo su más estricta responsabilidad, si encuentra que se reúnen los requisitos fijados en el artículo anterior, en un plazo no mayor de dos días, admitirá la misma y dictará auto con efectos de mandamiento en forma para que el demandado sea requerido de pago y, de no hacerlo, el propio demandado, el depositario, o quien detente la posesión, haga entrega de la posesión material al actor o a quien éste designe, de los bienes objeto de la garantía indicados en el contrato. En este último caso, el actor o quien éste designe, tendrá el carácter de depositario judicial y deberá informar al juez sobre el lugar en el que permanecerán los bienes que le han sido entregados, en tanto no sean vendidos.</p> <p>En el mismo auto mediante el cual se requiera de pago al demandado, el juez lo emplazará a juicio, en caso de que no pague o no haga entrega de la posesión material de los bienes dados en garantía al acreedor, para que dentro del término de cinco días ocurra a contestarla y a oponer, en su caso, las excepciones que se indican en el artículo 1414 bis 10.</p>	<p>Presentado el escrito de demanda, acompañado del contrato respectivo, la determinación del saldo que formule el actor, <u>la boleta de inscripción y certificación de la garantía en el Registro Único de Garantías Mobiliarias</u>, y cuando el promovente sea una institución de crédito, anexando la certificación de saldo que corresponda, el juez bajo su más estricta responsabilidad, si encuentra que se reúnen los requisitos fijados en el artículo anterior, en un plazo no mayor de dos días, admitirá la misma y dictará auto con efectos de mandamiento en forma para que el demandado sea requerido de pago y, de no hacerlo, el propio demandado, el depositario, o quien detente la posesión, haga entrega de la posesión material al actor o a quien éste designe, de los bienes objeto de la garantía indicados en el contrato <u>o inscrito en el Registro Único de Garantías Mobiliarias, según corresponda</u>. En este último caso, el actor o quien éste designe, tendrá el carácter de depositario judicial y deberá informar al juez sobre el lugar en el que permanecerán los bienes que le han sido entregados, en tanto no sean vendidos.</p> <p>En el mismo auto mediante el cual se requiera de pago al demandado, el juez lo emplazará a juicio, en caso de que no pague o no haga entrega de la posesión material de los bienes dados en garantía al acreedor, para que dentro del término de cinco días ocurra a contestarla y a oponer, en su caso, las excepciones que se indican en el artículo 1414 bis 10.</p>	
-------------------	---------------------------	---	---	--

		<p>La referida determinación de saldo podrá elaborarse a partir del último estado de cuenta que, en su caso, el deudor haya recibido y aceptado, siempre y cuando se haya pactado, o bien el acreedor esté obligado por disposición de Ley a entregar estados de cuenta al deudor. Se entenderá que el deudor ha recibido y aceptado este último estado de cuenta, si no lo objeta por escrito dentro de los diez días hábiles siguientes de haberlo recibido o bien efectúa pagos parciales al acreedor con posterioridad a su recepción.</p>	<p>La referida determinación de saldo podrá elaborarse a partir del último estado de cuenta que, en su caso, el deudor haya recibido y aceptado, siempre y cuando se haya pactado, o bien el acreedor esté obligado por disposición de Ley a entregar estados de cuenta al deudor. Se entenderá que el deudor ha recibido y aceptado este último estado de cuenta, si no lo objeta por escrito dentro de los diez días hábiles siguientes de haberlo recibido o bien efectúa pagos parciales al acreedor con posterioridad a su recepción.</p>	
1414 bis 16	Código de Comercio	<p>El juez debe presidir la audiencia, ordenar el desahogo de las pruebas admitidas y preparadas, y dar oportunidad a las partes para alegar lo que a su derecho convenga, por escrito o verbalmente, sin necesidad de asentarlos en autos en este último caso. Acto continuo, el juez dictará sentencia, la que será apelable únicamente en efecto devolutivo.</p>	<p>El juez debe presidir la audiencia, ordenar el desahogo de las pruebas admitidas y preparadas, y dar oportunidad a las partes para alegar lo que a su derecho convenga, por escrito o verbalmente, sin necesidad de asentarlos en autos en este último caso. Acto continuo, el juez dictará sentencia, la que será apelable únicamente en efecto devolutivo.</p> <p><u>En el caso de que la sentencia sea condenatoria al pago de los créditos vencidos y la obtención de la posesión de los bienes objeto de las garantías otorgadas mediante prenda sin transmisión de posesión o fideicomiso de garantía, el Juez deberá consultar en el Registro Único de Garantías Mobiliarias, si existen más acreedores respecto del bien y, en el caso de que si los hubiera, deberán ser convocados para intervenir en el proceso de valuación a que se refiere el artículo 1414 bis de éste Código.</u></p>	

			<u>pudiendo hacer al juez las observaciones que estimen oportunas para garantizar sus derechos.</u>	
--	--	--	---	--

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL

546	Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal	<p>Artículo 546.- De todo embargo de bienes raíces se tomará razón en el Registro Público de la Propiedad, librándose al efecto, por duplicado, copia certificada de la diligencia de embargo; uno de los ejemplares, después del registro, se unirá a los autos y el otro quedará en la expresada oficina.</p> <p>El embargo de títulos valor se puede realizar aun cuando no se tengan a la vista, y se tomará nota de él en el registro que corresponda conforme al procedimiento establecido en el párrafo anterior.</p>	<p>Artículo 546.- De todo embargo de bienes <u>muebles o inmuebles</u> se tomará razón en el Registro <u>correspondiente</u>, librándose al efecto, por duplicado, copia certificada de la diligencia de embargo; uno de los ejemplares, después del registro, se unirá a los autos y el otro quedará en la expresada oficina.</p> <p>El embargo de títulos valor se puede realizar aun cuando no se tengan a la vista, y se tomará nota de él en el registro que corresponda conforme al procedimiento establecido en el párrafo anterior.</p>	
566	Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal	<p>Artículo 566.- Cuando los bienes embargados fueren raíces, antes de procederse a su avalúo, la parte interesada deberá exhibir certificado de gravámenes de los últimos diez años; pero si en autos obrare ya un certificado que se refiera a parte de dicho lapso, sólo se exhibirá el relativo al período transcurrido desde la fecha de aquél hasta la en que se solicite.</p>	<p>Artículo 566.- Cuando los bienes embargados fueren raíces, antes de procederse a su avalúo, la parte interesada deberá exhibir certificado de gravámenes de los últimos diez años; pero si en autos obrare ya un certificado que se refiera a parte de dicho lapso, sólo se exhibirá el relativo al período transcurrido desde la fecha de aquél hasta la en que se solicite.</p>	<p>CÓDIGO DE COMERCIO TITULO TERCERO BIS De los Procedimientos de Ejecución de la Prenda sin Transmisión de Posesión y del Fideicomiso de Garantía</p>

			<p><u>Lo anterior, también será aplicable para el avalúo de los bienes muebles otorgados en garantía y registrados en el Registro correspondiente, a que se refiere el Título Tercero Bis del Código de Comercio, en el cual la parte interesada deberá exhibir certificaciones de asientos de los últimos diez años.</u></p>	
756	Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal	<p>Artículo 756.- El acreedor hipotecario, el prendario y el que tenga privilegio especial respecto del que no haya habido oposición, así como el que hubiere obtenido sentencia firme, no estará obligado a esperar el resultado final del concurso general, y será pagado con el producto de los bienes afectados a la hipoteca o privilegio, sin perjuicio de obligarlo a dar caución de acreedor de mejor derecho.</p> <p>Si antes de establecido el derecho de preferencia de algún acreedor, se distribuyera un dividendo, se considerará, como acreedor común, reservándose el precio del bien afectado hasta la concurrencia del importe de su crédito, por si esa preferencia quedase reconocida.</p>	<p>Artículo 756.- El acreedor hipotecario, el prendario y el que tenga privilegio especial respecto del que no haya habido oposición, así como el que hubiere obtenido sentencia firme, no estará obligado a esperar el resultado final del concurso general, y será pagado con el producto de los bienes afectados a la hipoteca, <u>prenda</u> o privilegio, sin perjuicio de obligarlo a dar caución de acreedor de mejor derecho.</p> <p>Si antes de establecido el derecho de preferencia de algún acreedor, se distribuyera un dividendo, se considerará, como acreedor común, reservándose el precio del bien afectado hasta la concurrencia del importe de su crédito, por si esa preferencia quedase reconocida.</p>	

LEY DE CONCURSOS MERCANTILES

121	Ley de Concursos Mercantiles	<p>Artículo 121.- Dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la publicación de la sentencia de concurso mercantil en el Diario Oficial, el conciliador deberá presentar al juez una lista provisional de créditos a cargo del Comerciante en el formato que al efecto determine el Instituto. Dicha lista deberá elaborarse con</p>	<p>Artículo 121.- Dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la publicación de la sentencia de concurso mercantil en el Diario Oficial, el conciliador deberá presentar al juez una lista provisional de créditos a cargo del Comerciante en el formato que al efecto determine el Instituto. Dicha lista deberá elaborarse con</p>	
-----	------------------------------	---	---	--

		base en la contabilidad del Comerciante; los demás documentos que permitan determinar su pasivo; la información que el propio Comerciante y su personal estarán obligados a proporcionar al conciliador, así como, en su caso, la información que se desprenda del dictamen del visitador y de las solicitudes de reconocimiento de créditos que se presenten.	base en la contabilidad del Comerciante; los demás documentos que permitan determinar su pasivo; la información que el propio Comerciante y su personal estarán obligados a proporcionar al conciliador, así como, en su caso, la información que se desprenda del dictamen del visitador y de las solicitudes de reconocimiento de créditos que se presenten <u>y, en su caso, la información de las garantías mobiliarias registradas en el Registro Único de Garantías Mobiliarias.</u>	
125	Ley de Concursos Mercantiles	<p>Artículo 125.- Las solicitudes de reconocimiento de créditos deberán presentarse al conciliador y contener lo siguiente:</p> <p>I. El nombre completo y domicilio del acreedor;</p> <p>II. La cuantía del crédito que estime tener en contra y, en su caso, a favor del Comerciante;</p> <p>III. Las garantías, condiciones, términos y otras características del crédito, entre ellas el tipo de documento que evidencie el crédito;</p> <p>IV. El grado y prelación que a juicio del solicitante y de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, corresponda al crédito cuyo reconocimiento solicita, y</p>	<p>Artículo 125.- Las solicitudes de reconocimiento de créditos deberán presentarse al conciliador y contener lo siguiente:</p> <p>I. El nombre completo y domicilio del acreedor;</p> <p>II. La cuantía del crédito que estime tener en contra y, en su caso, a favor del Comerciante;</p> <p>III. Las garantías, condiciones, términos y otras características del crédito, entre ellas el tipo de documento que evidencie el crédito;</p> <p><u>En el caso de las garantías mobiliarias, se deberá exhibir la boleta de inscripción y certificación respectiva en el Registro Único de Garantías Mobiliarias.</u></p> <p>IV. El grado y prelación que a juicio del solicitante y de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, corresponda al crédito cuyo reconocimiento solicita, y</p>	

		<p>V. Los datos que identifiquen, en su caso, cualquier procedimiento administrativo, laboral, judicial o arbitral, que se haya iniciado y que tenga relación con el crédito de que se trate.</p> <p>La solicitud de reconocimiento de crédito deberá presentarse firmada por el acreedor, en los formatos que al efecto determine el Instituto y deberá acompañarse de los documentos originales en los que se base el solicitante o copia certificada de los mismos. En caso de que éstos no obren en su poder, deberá indicar el lugar en donde se encuentren y demostrar que inició los trámites para obtenerlos.</p> <p>El acreedor deberá designar un domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción del juez o, a su costa y bajo su responsabilidad, podrá señalar un medio alternativo de comunicación para ser notificado tal como fax o correo electrónico. Ante la omisión de este requisito, las notificaciones que corresponda hacerle, aun las de carácter personal, se realizarán en los estrados del juzgado. En este caso, el conciliador hará sus comunicaciones por conducto del juez.</p>	<p>V. Los datos que identifiquen, en su caso, cualquier procedimiento administrativo, laboral, judicial o arbitral, que se haya iniciado y que tenga relación con el crédito de que se trate.</p> <p>La solicitud de reconocimiento de crédito deberá presentarse firmada por el acreedor, en los formatos que al efecto determine el Instituto y deberá acompañarse de los documentos originales en los que se base el solicitante o copia certificada de los mismos. En caso de que éstos no obren en su poder, deberá indicar el lugar en donde se encuentren y demostrar que inició los trámites para obtenerlos.</p> <p>El acreedor deberá designar un domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción del juez o, a su costa y bajo su responsabilidad, podrá señalar un medio alternativo de comunicación para ser notificado tal como fax o correo electrónico. Ante la omisión de este requisito, las notificaciones que corresponda hacerle, aun las de carácter personal, se realizarán en los estrados del juzgado. En este caso, el conciliador hará sus comunicaciones por conducto del juez.</p>	
220	Ley de Concursos Mercantiles	<p>Artículo 220. Son acreedores con privilegio especial todos los que, según el código de comercio o leyes de su materia, tengan privilegio especial o un derecho de retención.</p> <p>Los acreedores con privilegio especial cobrarán en los mismos</p>	<p>Artículo 220. Son acreedores con privilegio especial todos los que, según el código de comercio o leyes de su materia, tengan privilegio especial o un derecho de retención.</p> <p>Los acreedores con privilegio especial cobrarán en los mismos</p>	Se precisa la redacción debido a la reforma publicada en el DOF el 13 de junio del año en curso.

		términos que los acreedores con garantía real o de acuerdo con la fecha de su crédito, si no estuviere sujeto a inscripción, a no ser que varios de ellos concurrieran sobre una cosa determinada, en cuyo caso se hará la distribución a prorrata sin distinción de fechas, salvo que las leyes dispusieran lo contrario.	términos que los acreedores con garantía real, <u>si en dichos privilegios el acreedor no mantiene la posesión de los bienes muebles, éstos deberán estar inscritos en el Registro Único de Garantías Mobiliarias</u> , a no ser que varios de ellos concurrieran sobre una cosa determinada, en cuyo caso se hará la distribución a prorrata sin distinción de fechas, salvo que las leyes dispusieran lo contrario.	
--	--	--	---	--

LEY ÓRGANICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL				
58	Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal	<p>Artículo 58. Son obligaciones de los Secretarios de Acuerdos.</p> <p>I. Formular los Proyectos de acuerdo, realizar emplazamientos y notificaciones cuando lo ordene el juez;</p> <p>II. Dar cuenta diariamente a sus jueces bajo su responsabilidad y dentro de las veinticuatro horas siguientes a su presentación ante la oficialía de partes del Juzgado, con todos los escritos y promociones, en los negocios de la competencia de aquellos, así como de los oficios y demás documentos que se reciban en el Juzgado;</p> <p>III. Autorizar los despachos, exhortos, actas, diligencias, autos y toda clase de resoluciones que se expidan, asienten, practiquen o</p>	<p>Artículo 58. Son obligaciones de los Secretarios de Acuerdos.</p> <p>I. Formular los Proyectos de acuerdo, realizar emplazamientos y notificaciones cuando lo ordene el juez;</p> <p>II. Dar cuenta diariamente a sus jueces bajo su responsabilidad y dentro de las veinticuatro horas siguientes a su presentación ante la oficialía de partes del Juzgado, con todos los escritos y promociones, en los negocios de la competencia de aquellos, así como de los oficios y demás documentos que se reciban en el Juzgado;</p> <p>III. Autorizar los despachos, exhortos, actas, diligencias, autos y toda clase de resoluciones que se expidan, asienten, practiquen o</p>	

		<p>dicten por el Juez;</p> <p>IV. Asentar en los expedientes las certificaciones que procedan conforme a la ley o que el Juez ordene;</p> <p>V. Asistir a las diligencias de pruebas que debe recibir el Juez de acuerdo con las leyes aplicables;</p> <p>VI. Expedir las copias autorizadas que la ley determine o deban darse a las partes en virtud de decreto judicial;</p> <p>VII. Cuidar que los expedientes sean debidamente foliados, utilizando, para el efecto el equipo que permita imprimir de forma permanente dicho folio y el material aprobado por el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal para la integración de los expedientes. Al agregar o sustraer alguna o algunas de las hojas de éstos, asentar razón con motivo de la causa, sellando las actuaciones, oficios y demás documentos que lo requieran, rubricando aquéllas en el centro del escrito;</p> <p>VIII. Guardar en el secreto del Juzgado los pliegos, escritos o documentos y valores cuando así lo disponga la ley;</p> <p>IX. Inventariar y conservar en su poder los expedientes mientras se encuentren en trámite en el Juzgado y entregarlos con las formalidades legales, cuando deba tener lugar la remisión;</p>	<p>dicten por el Juez;</p> <p>IV. Asentar en los expedientes las certificaciones que procedan conforme a la ley o que el Juez ordene;</p> <p>V. Asistir a las diligencias de pruebas que debe recibir el Juez de acuerdo con las leyes aplicables;</p> <p>VI. Expedir las copias autorizadas que la ley determine o deban darse a las partes en virtud de decreto judicial;</p> <p>VII. Cuidar que los expedientes sean debidamente foliados, utilizando, para el efecto el equipo que permita imprimir de forma permanente dicho folio y el material aprobado por el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal para la integración de los expedientes. Al agregar o sustraer alguna o algunas de las hojas de éstos, asentar razón con motivo de la causa, sellando las actuaciones, oficios y demás documentos que lo requieran, rubricando aquéllas en el centro del escrito;</p> <p>VIII. Guardar en el secreto del Juzgado los pliegos, escritos o documentos y valores cuando así lo disponga la ley;</p> <p>IX. Inventariar y conservar en su poder los expedientes mientras se encuentren en trámite en el Juzgado y entregarlos con las formalidades legales, cuando deba tener lugar la remisión;</p>	
--	--	---	---	--

		<p>X. Notificar en el Juzgado, personalmente a las partes, en los juicios o asuntos que se ventilen ante él, en los términos del artículo 123 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal;</p> <p>XI. Cuidar y vigilar que el archivo se arregle por orden alfabético, de apellidos del actor o del promovente en asuntos de jurisdicción voluntaria;</p> <p>XII. Remitir los expedientes al Archivo Judicial, a la superioridad o al substituto legal, previo registro en sus respectivos casos;</p> <p>XIII. Ordenar y vigilar que se despachen sin demora los asuntos y correspondencia del Juzgado, ya sea que se refiera a negocios judiciales del mismo o al desahogo de los oficios que se manden librar en las determinaciones respectivas, dictadas en los expedientes;</p> <p>XIV. Tener a su cargo, bajo su responsabilidad y debidamente autorizados para su uso, los libros de control del Juzgado, designando, de entre los empleados subalternos del mismo, al que debe llevarlos;</p> <p>XV. Conservar en su poder el sello del Juzgado;</p>	<p>X. Notificar en el Juzgado, personalmente a las partes, en los juicios o asuntos que se ventilen ante él, en los términos del artículo 123 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal;</p> <p>XI. Cuidar y vigilar que el archivo se arregle por orden alfabético, de apellidos del actor o del promovente en asuntos de jurisdicción voluntaria;</p> <p>XII. Remitir los expedientes al Archivo Judicial, a la superioridad o al substituto legal, previo registro en sus respectivos casos;</p> <p>XIII. Ordenar y vigilar que se despachen sin demora los asuntos y correspondencia del Juzgado, ya sea que se refiera a negocios judiciales del mismo o al desahogo de los oficios que se manden librar en las determinaciones respectivas, dictadas en los expedientes;</p> <p>XIV. Tener a su cargo, bajo su responsabilidad y debidamente autorizados para su uso, los libros de control del Juzgado, designando, de entre los empleados subalternos del mismo, al que debe llevarlos;</p> <p>XV. Conservar en su poder el sello del Juzgado;</p>	
--	--	--	--	--

		<p>XVI. Ejercer bajo su responsabilidad, por sí mismo o por conducto de los servidores públicos de la administración de justicia subalternos, la vigilancia que sea necesaria en la oficina, para evitar la pérdida o extravío de expedientes. En cada Juzgado existirá una mesa que controlará su ubicación y distribución, que sólo se mostrarán mediante el vale de resguardo respectivo previa identificación, el cual será sellado a la devolución del expediente y entregado en la mesa de salida del Juzgado, y</p> <p>XVII. Las demás que les confieran las leyes y los reglamentos.</p>	<p>XVI. Ejercer bajo su responsabilidad, por sí mismo o por conducto de los servidores públicos de la administración de justicia subalternos, la vigilancia que sea necesaria en la oficina, para evitar la pérdida o extravío de expedientes. En cada Juzgado existirá una mesa que controlará su ubicación y distribución, que sólo se mostrarán mediante el vale de resguardo respectivo previa identificación, el cual será sellado a la devolución del expediente y entregado en la mesa de salida del Juzgado, y</p> <p><u>XVII. Consultar en el Registro Único de Garantías Mobiliarias los asuntos en los cuales la garantía recaiga sobre bienes muebles.</u></p> <p>XVIII. Las demás que les confieran las leyes y los reglamentos.</p>	
--	--	--	--	--

CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CÍVILES

9	Código Federal de Procedimientos Cíviles	<p>Artículo 9.- En todo caso en que este Código exija el otorgamiento de una garantía, ésta se otorgará con sujeción a las disposiciones de las leyes substantivas aplicables.</p> <p>Cuando haya temor fundado de que una parte no pueda</p>	<p>Artículo 9.- En todo caso en que este Código exija el otorgamiento de una garantía, ésta se otorgará con sujeción a las disposiciones de las leyes substantivas aplicables.</p> <p><u>En el caso de las garantías otorgadas que recaigan sobre bienes muebles, y que sean gravámenes registrables, éstas deberán ser inscritas, previamente a su ofrecimiento, en el Registro Único de Garantías Mobiliarias.</u></p> <p>Cuando haya temor fundado de que una parte no pueda</p>	Se precisa la redacción debido a la reforma publicada en el DOF el 13 de junio del año en curso.
---	--	--	---	--

		responder, en su oportunidad, del pago de las costas, a petición de la contraria se le exigirá garantía bastante, a juicio del tribunal, o se le embargarán bienes suficientes, si no la otorga, para lograr, en su caso, el pago de aquéllas. Son aplicables los procedimientos y deben exigirse las contragarantías de las medidas precautorias.	responder, en su oportunidad, del pago de las costas, a petición de la contraria se le exigirá garantía bastante, a juicio del tribunal, o se le embargarán bienes suficientes, si no la otorga, para lograr, en su caso, el pago de aquéllas. Son aplicables los procedimientos y deben exigirse las contragarantías de las medidas precautorias.	
472	Código Federal de Procedimientos Cíviles	Artículo 472- No podrá procederse al remate de bienes raíces, sin que previamente se haya pedido, al Registro Público correspondiente, un certificado total de los gravámenes que pesen sobre ellos, hasta la fecha en que se ordenó la venta, ni sin que se haya citado a los acreedores que aparezcan en dicho certificado. Si en autos obrare ya otro certificado, sólo se pedirá, al Registro, el relativo al período o períodos que aquél no abarque.	Artículo 472- No podrá procederse al remate de bienes muebles o inmuebles , sin que previamente se haya pedido, al Registro Público correspondiente, una certificación o un certificado total de los gravámenes que pesen sobre ellos, respectivamente , hasta la fecha en que se ordenó la venta, ni sin que se haya citado a los acreedores que aparezcan en dicho certificado. Si en autos obrare ya otro certificado, sólo se pedirá, al Registro, el relativo al período o períodos que aquél no abarque.	

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

149	Código Fiscal de la Federación	Artículo 149.- El fisco federal tendrá preferencia para recibir el pago de créditos provenientes de ingresos que la Federación debió percibir, con excepción de adeudos garantizados con prenda o hipoteca, de alimentos, de salarios o sueldos devengados en el último año o de indemnizaciones a los trabajadores de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo.	Artículo 149.- El fisco federal tendrá preferencia para recibir el pago de créditos provenientes de ingresos que la Federación debió percibir, con excepción de adeudos garantizados con prenda o hipoteca, de alimentos, de salarios o sueldos devengados en el último año o de indemnizaciones a los trabajadores de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo o con garantías mobiliarias, si éstas son de las registrables deberán estar previamente inscritas en el Registro Único de Garantías Mobiliarias.	Se precisa la redacción debido a la reforma publicada en el DOF el 13 de junio del año en curso
-----	--------------------------------	---	--	---

		<p>Para que sea aplicable la excepción a que se refiere el párrafo anterior, será requisito indispensable que con anterioridad a la fecha en que surta efectos la notificación del crédito fiscal, las garantías se hayan inscrito en el registro público que corresponda y, respecto de los adeudos por alimentos, que se haya presentado la demanda ante las autoridades competentes.</p> <p>La vigencia y exigibilidad del crédito cuya preferencia se invoque deberá comprobarse en forma fehaciente al hacerse valer el recurso administrativo.</p> <p>En ningún caso el fisco federal entrará en los juicios universales. Cuando se inicie juicio de quiebra, suspensión de pagos o de concurso, el juez que conozca del asunto deberá dar aviso a las autoridades fiscales para que, en su caso, hagan exigibles los créditos fiscales a su favor a través del procedimiento administrativo de ejecución.</p>	<p>Para que sea aplicable la excepción a que se refiere el párrafo anterior, será requisito indispensable que con anterioridad a la fecha en que surta efectos la notificación del crédito fiscal, las garantías que sean de las registrables, se hayan inscrito en el registro público que corresponda y, respecto de los adeudos por alimentos, que se haya presentado la demanda ante las autoridades competentes.</p> <p>La vigencia y exigibilidad del crédito cuya preferencia se invoque deberá comprobarse en forma fehaciente al hacerse valer el recurso administrativo.</p> <p>En ningún caso el fisco federal entrará en los juicios universales. Cuando se inicie juicio de quiebra, suspensión de pagos o de concurso, el juez que conozca del asunto deberá dar aviso a las autoridades fiscales para que, en su caso, hagan exigibles los créditos fiscales a su favor a través del procedimiento administrativo de ejecución.</p>	
--	--	--	--	--

CÓDIGO CIVIL FEDERAL

2859	Código Civil Federal	<p>Artículo 2859.- Se entiende entregada jurídicamente la prenda al acreedor, cuando éste y el deudor convienen en que quede en poder de un tercero, o bien cuando quede en poder del mismo deudor porque así lo haya estipulado con el acreedor o expresamente lo autorice la ley.</p>	<p>Artículo 2859.- Se entiende entregada jurídicamente la prenda al acreedor, cuando éste y el deudor convienen en que quede en poder de un tercero, o bien cuando quede en poder del mismo deudor porque así lo haya estipulado con el acreedor o expresamente lo autorice la ley.</p>	
------	----------------------	--	--	--

		<p>Cuando la prenda quede en poder del deudor, para que surta efectos contra tercero debe inscribirse en el Registro Público. La inscripción sólo podrá efectuarse si se trata de bienes que sean susceptibles de identificarse de manera indubitable y si conforme al Reglamento del Registro pueden ser materia de inscripción.</p> <p>El deudor puede usar de la prenda que quede en su poder en los términos que convengan las partes.</p>	<p>Cuando la prenda quede en poder del deudor, para que surta efectos contra tercero debe inscribirse en el Registro Único de Garantías Mobiliarias. La inscripción sólo podrá efectuarse si se trata de bienes que sean susceptibles de identificarse de manera indubitable y si conforme al Reglamento del Registro pueden ser materia de inscripción.</p> <p>El deudor puede usar de la prenda que quede en su poder en los términos que convengan las partes.</p>	
2981	Código Civil Federal	<p>Artículo 2981.- Los acreedores hipotecarios y los pignoraticios, no necesitan entrar en concurso para hacer el cobro de sus créditos. Pueden deducir las acciones que les competan en virtud de la hipoteca o de la prenda, en los juicios respectivos, a fin de ser pagados con el valor de los bienes que garanticen sus créditos.</p>	<p>Artículo 2981.- Los acreedores hipotecarios y los pignoraticios, no necesitan entrar en concurso para hacer el cobro de sus créditos. Pueden deducir las acciones que les competan en virtud de la hipoteca o de la prenda, en los juicios respectivos, a fin de ser pagados con el valor de los bienes que garanticen sus créditos, en el caso de la hipoteca deberá estar inscrita en el Registro correspondiente, si la prenda es de los gravámenes registrables deberá estar previamente inscrita en el Registro Único de Garantías Mobiliarias.</p>	<p>Se precisa la redacción debido a la reforma publicada en el DOF el 13 de junio del año en curso</p>

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL

2859	Código Civil para el Distrito Federal	<p>Artículo 2859.- Se entiende entregada jurídicamente la prenda al acreedor, cuando éste y el deudor convienen en que quede en poder de un tercero, o bien cuando quede en poder del mismo deudor porque así lo haya estipulado con el acreedor o expresamente lo autorice la ley.</p>	<p>Artículo 2859.- Se entiende entregada jurídicamente la prenda al acreedor, cuando éste y el deudor convienen en que quede en poder de un tercero, o bien cuando quede en poder del mismo deudor porque así lo haya estipulado con el acreedor o expresamente lo autorice la ley.</p>	
------	---------------------------------------	--	--	--

		<p>Cuando la prenda quede en poder del deudor, para que surta efectos contra tercero debe inscribirse en el Registro Público. La inscripción sólo podrá efectuarse si se trata de bienes que sean susceptibles de identificarse de manera indubitable y si conforme al Reglamento del Registro pueden ser materia de inscripción.</p> <p>El deudor puede usar de la prenda que quede en su poder en los términos que convengan las partes.</p>	<p>Cuando la prenda quede en poder del deudor, para que surta efectos contra tercero debe inscribirse en el Registro Único de Garantías Mobiliarias. La inscripción sólo podrá efectuarse si se trata de bienes que sean susceptibles de identificarse de manera indubitable y si conforme al Reglamento del Registro pueden ser materia de inscripción.</p> <p>El deudor puede usar de la prenda que quede en su poder en los términos que convengan las partes.</p>	
2981	Código Civil para el Distrito Federal	<p>Artículo 2981.- Los acreedores hipotecarios y los pignoraticios, no necesitan entrar en concurso para hacer el cobro de sus créditos. Pueden deducir las acciones que les competan en virtud de la hipoteca o de la prenda, en los juicios respectivos, a fin de ser pagados con el valor de los bienes que garanticen sus créditos.</p>	<p>Artículo 2981.- Los acreedores hipotecarios y los pignoraticios, no necesitan entrar en concurso para hacer el cobro de sus créditos. Pueden deducir las acciones que les competan en virtud de la hipoteca o de la prenda, en los juicios respectivos, a fin de ser pagados con el valor de los bienes que garanticen sus créditos, en el caso de la hipoteca deberá estar inscrita en el Registro correspondiente, si la prenda es de los gravámenes registrables deberá estar previamente inscrita en el Registro Único de Garantías Mobiliarias.</p>	<p>Se precisa la redacción debido a la reforma publicada en el DOF el 13 de junio del año en curso</p>



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

MEXICO

Anexo A: Análisis del ordenamiento legal para establecer la obligación de los jueces de revisar el RUG *Registro Único de Garantías Mobiliarias (RUG).*

Julio 2014.

Índice

Contexto y contenido del documento	3
Análisis del ordenamiento legal para establecer la obligación de los jueces de revisar el RUG	4
Análisis del Código de Comercio.....	4
Análisis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal	5
Análisis de la Ley de Concursos Mercantiles	6
Análisis de la Ley Órganica Del Tribunal Superior De Justicia Del Distrito Federal.....	8
Análisis del Código Federal de Procedimientos Civiles.....	10
Análisis del Código Civil Federal	10
Análisis del Código Civil para el Distrito Federal.....	11

Contexto y contenido del documento

El presente documento fue elaborado como parte del Programa de Política Económica para México (PROPEM) el cual es financiado por la Agencia para el Desarrollo Internacional del Gobierno de los Estados Unidos (USAID), y su objetivo es asesorar a instituciones públicas de México en el diseño e implementación de políticas públicas enfocadas a temas económicos con el fin de incrementar la competitividad del país a nivel internacional. En específico el presente reporte corresponde al proyecto “Registro Único de Garantías Mobiliarias (RUG)”, y el cual tiene el objetivo de realizar un análisis de las normas legales y reglamentarias que regulen la ejecución de las garantías mobiliarias, a efecto de poder proponer reformas necesarias para hacer exigible a los jueces, el análisis, registro y verificación de la existencia o no de garantías mobiliarias involucradas en los juicios en trámite, así como su ejecución más eficiente y de observancia obligatoria para el Poder Judicial.

El proyecto fue llevado a cabo a través de un análisis de las eficiencias y deficiencias del RUG mediante entrevistas con el personal del RUG, de la Secretaría de Economía, del Poder Judicial, con abogados especializados en materia de registro de garantías mobiliarias. Posteriormente se llevó a cabo un análisis de todo el ordenamiento legal para definir en qué leyes y/o reglamentos sería necesario establecer la obligación de los jueces de consultar el RUG, obtener un certificado de gravamen y registrar las garantías mobiliarias de los bienes de los juicios de los que sean parte. Por último se realizó un modelo de propuesta de iniciativa de reformas a las leyes y reglamentos para determinar la prelación de créditos, establecer el registro de las garantías mobiliarias y ejecutar las garantías mobiliarias.

El proyecto buscaba llevar a cabo los siguientes productos de trabajo:

1. Reporte con los resultados de las reuniones sostenidas con el personal del RUG, la Secretaría de Economía, abogados especializados, y el Poder Judicial
 2. Reporte con las conclusiones de las eficiencias y deficiencias del RUG
 3. Reporte con los resultados del análisis de todo el ordenamiento legal para determinar las leyes en las que será necesario establecer la obligación de los jueces de consultar el RUG, obtener un certificado de gravamen, y registrar las registrar garantías sobre bienes muebles que sean parte de juicios de los que tengan conocimiento
 4. Reporte con el modelo de propuesta de iniciativa de reformas a los artículos de las leyes y reglamentos en los que será necesario establecer la obligación de los jueces de consultar el RUG, obtener un certificado de gravamen, y registrar las registrar garantías sobre bienes muebles que sean parte de juicios de los que tengan conocimiento
 5. Reporte con el modelo de propuesta de iniciativa de reformas a las reglas procesales, a efecto de hacer ejecutables las garantías establecidas sobre bienes muebles, aplicando las garantías constituidas para el pago de acreedores, a efecto de poder recuperar de forma breve los derechos preferentes que tengan las PYMES sobre dichas garantías
- Anexo A. Análisis del ordenamiento legal para establecer la obligación de los jueces de revisar el RUG
 - Anexo B. Análisis del ordenamiento legal para establecer la prelación de créditos

El presente reporte, titulado *Análisis del ordenamiento legal para establecer la obligación de los jueces de revisar el RUG*, específicamente corresponde al Anexo A arriba mencionado, y complementa y sustenta el modelo de propuesta de iniciativa de reformas para el funcionamiento del RUG (reportes 4 y 5). Este reporte busca llevar a cabo un análisis del ordenamiento legal con el objetivo de establecer la obligación de los

jueces de revisar el RUG, el cual sirvió para posteriormente poder desarrollar el modelo de propuesta de iniciativa de reformas.

Análisis del ordenamiento legal para establecer la obligación de los jueces de revisar el RUG

CÓDIGO DE COMERCIO

Artículo 32 bis 8.- Las normas reglamentarias del Registro desarrollarán, entre otros:

I. Los procedimientos y requisitos técnicos y operativos con motivo de inscripciones, anotaciones, certificaciones y consultas que se lleven a cabo;

II. Las características de las formas precodificadas para la inscripción y anotación en el Registro;

III. Los criterios de clasificación de las distintas garantías, así como de los bienes afectos a las mismas;

IV. El procedimiento para la renovación de las inscripciones;

V. Los procedimientos y requisitos para la rectificación, modificación o cancelación de la información del Registro, y

VI. Cualquier otro dato, requisito, procedimiento o condición necesarios para la adecuada operación del Registro.

VII. La obligación de los jueces de consultar el Registro Único de Garantías Mobiliarias antes de iniciar el procedimiento de ejecución respecto de un bien mueble, para efecto de verificar la prelación de derechos que existen respecto del mismo.

Artículo 1414 bis 8.- Presentado el escrito de demanda, acompañado del contrato respectivo, la determinación del saldo que formule el actor, **la boleta de inscripción y certificación de la garantía en el Registro Único de Garantías Mobiliarias**, y cuando el promovente sea una institución de crédito, anexando la certificación de saldo que corresponda, el juez bajo su más estricta responsabilidad, si encuentra que se reúnen los requisitos fijados en el artículo anterior, en un plazo no mayor de dos días, admitirá la misma y dictará auto con efectos de mandamiento en forma para que el demandado sea requerido de pago y, de no hacerlo, el propio demandado, el depositario, o quien detente la

posesión, haga entrega de la posesión material al actor o a quien éste designe, de los bienes objeto de la garantía indicados en el contrato o inscrito en el Registro Único de Garantías Único de Garantías Mobiliarias, según corresponda. En este último caso, el actor o quien éste designe, tendrá el carácter de depositario judicial y deberá informar al juez sobre el lugar en el que permanecerán los bienes que le han sido entregados, en tanto no sean vendidos.

En el mismo auto mediante el cual se requiera de pago al demandado, el juez lo emplazará a juicio, en caso de que no pague o no haga entrega de la posesión material de los bienes dados en garantía al acreedor, para que dentro del término de cinco días ocurra a contestarla y a oponer, en su caso, las excepciones que se indican en el artículo 1414 bis 10.

La referida determinación de saldo podrá elaborarse a partir del último estado de cuenta que, en su caso, el deudor haya recibido y aceptado, siempre y cuando se haya pactado, o bien el acreedor esté obligado por disposición de Ley a entregar estados de cuenta al deudor. Se entenderá que el deudor ha recibido y aceptado este último estado de cuenta, si no lo objeta por escrito dentro de los diez días hábiles siguientes de haberlo recibido o bien efectúa pagos parciales al acreedor con posterioridad a su recepción.

Artículo 1414 bis 16.- El juez debe presidir la audiencia, ordenar el desahogo de las pruebas admitidas y preparadas, y dar oportunidad a las partes para alegar lo que a su derecho convenga, por escrito o verbalmente, sin necesidad de asentarlo en autos en este último caso. Acto continuo, el juez dictará sentencia, la que será apelable únicamente en efecto devolutivo.

En el caso de que la sentencia sea condenatoria al pago de los créditos vencidos y la obtención de la posesión de los bienes objeto de las garantías otorgadas mediante prenda sin transmisión de posesión o fideicomiso de garantía, el Juez deberá consultaren el Registro Único de Garantías Mobiliarias si existen más acreedores respecto del bien y, en el caso de que si los hubiera, deberán ser convocados para intervenir en el proceso de valuación a que se refiere el artículo 1414 bis de éste Código, pudiendo hacer al juez las observaciones que estimen oportunas para garantizar sus derechos.

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CÍVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL

Artículo 546.- De todo embargo de bienes muebles o inmuebles se tomará razón en el Registro correspondiente, librándose al efecto, por duplicado, copia certificada de la diligencia de embargo; uno de los ejemplares, después del registro, se unirá a los autos y el otro quedará en la expresada oficina.

El embargo de títulos valor se puede realizar aun cuando no se tengan a la vista, y se tomará nota de él en el registro que corresponda conforme al procedimiento establecido en el párrafo anterior.

Artículo 566.- Cuando los bienes embargados fueren raíces, antes de procederse a su avalúo, la parte interesada deberá exhibir certificado de gravámenes de los últimos diez años; pero si en autos obrare ya un certificado que se refiera a parte de dicho lapso, sólo se exhibirá el relativo al período transcurrido desde la fecha de aquél hasta la en que se solicite.

Lo anterior, también será aplicable para el avalúo de los bienes muebles otorgados en garantía y registrados en el Registro Correspondiente, a que se refiere el Título Tercero Bis del Código de Comercio, en el cual la parte interesada deberá exhibir certificaciones de asientos de los últimos diez años.

LEY DE CONCURSOS MERCANTILES

Artículo 121.- Dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la publicación de la sentencia de concurso mercantil en el Diario Oficial, el conciliador deberá presentar al juez una lista provisional de créditos a cargo del Comerciante en el formato que al efecto determine el Instituto. Dicha lista deberá elaborarse con base en la contabilidad del Comerciante; los demás documentos que permitan determinar su pasivo; la información que el propio Comerciante y su personal estarán obligados a proporcionar al conciliador, así como, en su caso, la información que se desprenda del dictamen del visitador y de las solicitudes de reconocimiento de créditos que se presenten **y, en su caso, la información de las garantías mobiliarias registradas en el Registro Único de Garantías Mobiliarias.**

Artículo 125.- Las solicitudes de reconocimiento de créditos deberán presentarse al conciliador y contener lo siguiente:

I. El nombre completo y domicilio del acreedor;

II. La cuantía del crédito que estime tener en contra y, en su caso, a favor del Comerciante;

III. Las garantías, condiciones, términos y otras características del crédito, entre ellas el tipo de documento que evidencie el crédito;

En el caso de las garantías mobiliarias, se deberá exhibir la inscripción respectiva en el Registro Único de Garantías Mobiliarias.

IV. El grado y prelación que a juicio del solicitante y de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, corresponda al crédito cuyo reconocimiento solicita, y

V. Los datos que identifiquen, en su caso, cualquier procedimiento administrativo, laboral, judicial o arbitral, que se haya iniciado y que tenga relación con el crédito de que se trate.

La solicitud de reconocimiento de crédito deberá presentarse firmada por el acreedor, en los formatos que al efecto determine el Instituto y deberá acompañarse de los documentos originales en los que se base el solicitante o copia certificada de los mismos. En caso de que éstos no obren en su poder, deberá indicar el lugar en donde se encuentren y demostrar que inició los trámites para obtenerlos.

El acreedor deberá designar un domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción del juez o, a su costa y bajo su responsabilidad, podrá señalar un medio alternativo de comunicación para ser notificado tal como fax o correo electrónico. Ante la omisión de este requisito, las notificaciones que corresponda hacerle, aun las de carácter personal, se realizarán en los estrados del juzgado. En este caso, el conciliador hará sus comunicaciones por conducto del juez.

Artículo 220.- Son acreedores con privilegio especial todos los que, según el código de comercio o leyes de su materia, tengan privilegio especial o un derecho de retención.

Los acreedores con privilegio especial cobrarán en los mismos términos que los acreedores con garantía real, **siempre y cuando dichos privilegios se encuentren inscritos en el Registro Único de Garantías Mobiliarias**, a no ser que varios de ellos concurrieran sobre una cosa determinada, en cuyo caso se hará la distribución a prorrata sin distinción de fechas, salvo que las leyes dispusieran lo contrario.

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

Artículo 58.- Son obligaciones de los Secretarios de Acuerdos.

I. Formular los Proyectos de acuerdo, realizar emplazamientos y notificaciones cuando lo ordene el juez;

II. Dar cuenta diariamente a sus jueces bajo su responsabilidad y dentro de las veinticuatro horas siguientes a su presentación ante la oficialía de partes del Juzgado, con todos los escritos y promociones, en los negocios de la competencia de aquellos, así como de los oficios y demás documentos que se reciban en el Juzgado;

III. Autorizar los despachos, exhortos, actas, diligencias, autos y toda clase de resoluciones que se expidan, asienten, practiquen o dicten por el Juez;

IV. Asentar en los expedientes las certificaciones que procedan conforme a la ley o que el Juez ordene;

V. Asistir a las diligencias de pruebas que debe recibir el Juez de acuerdo con las leyes aplicables;

VI. Expedir las copias autorizadas que la ley determine o deban darse a las partes en virtud de decreto judicial;

VII. Cuidar que los expedientes sean debidamente foliados, utilizando, para el efecto el equipo que permita imprimir de forma permanente dicho folio y el material aprobado por el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal para la integración de los expedientes. Al agregar o sustraer alguna o algunas de las hojas de éstos, asentar razón con motivo de la causa, sellando las actuaciones, oficios y demás documentos que lo requieran, rubricando aquéllas en el centro del escrito;

VIII. Guardar en el secreto del Juzgado los pliegos, escritos o documentos y valores cuando así lo disponga la ley;

IX. Inventariar y conservar en su poder los expedientes mientras se encuentren en trámite en el Juzgado y entregarlos con las formalidades legales, cuando deba tener lugar la remisión;

X. Notificar en el Juzgado, personalmente a las partes, en los juicios o asuntos que se ventilen ante él, en los términos del artículo 123 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal;

XI. Cuidar y vigilar que el archivo se arregle por orden alfabético, de apellidos del actor o del promovente en asuntos de jurisdicción voluntaria;

XII. Remitir los expedientes al Archivo Judicial, a la superioridad o al sustituto legal, previo registro en sus respectivos casos;

XIII. Ordenar y vigilar que se despachen sin demora los asuntos y correspondencia del Juzgado, ya sea que se refiera a negocios judiciales del mismo o al desahogo de los oficios que se manden librar en las determinaciones respectivas, dictadas en los expedientes;

XIV. Tener a su cargo, bajo su responsabilidad y debidamente autorizados para su uso, los libros de control del Juzgado, designando, de entre los empleados subalternos del mismo, al que debe llevarlos;

XV. Conservar en su poder el sello del Juzgado;

XVI. Ejercer bajo su responsabilidad, por sí mismo o por conducto de los servidores públicos de la administración de justicia subalternos, la vigilancia que sea necesaria en la oficina, para evitar la pérdida o extravío de expedientes. En cada Juzgado existirá una mesa que controlará su ubicación y distribución, que sólo se mostrarán mediante el vale de resguardo respectivo previa identificación, el cual será sellado a la devolución del expediente y entregado en la mesa de salida del Juzgado, y

XVII. Consultar en el Registro Único de Garantías Mobiliarias en los asuntos en los que la garantía recaiga sobre bienes muebles.

XVIII. Las demás que les confieran las leyes y los reglamentos.

CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CÍVILES

Artículo 9.- En todo caso en que este Código exija el otorgamiento de una garantía, ésta se otorgará con sujeción a las disposiciones de las leyes substantivas aplicables.

En el caso de las garantías otorgadas que recaigan sobre bienes muebles, éstas deberán ser inscritas, previamente a su ofrecimiento, en el Registro Único de Garantías Mobiliarias.

Cuando haya temor fundado de que una parte no pueda responder, en su oportunidad, del pago de las costas, a petición de la contraria se le exigirá garantía bastante, a juicio del tribunal, o se le embargarán bienes suficientes, si no la otorga, para lograr, en su caso, el pago de aquéllas. Son aplicables los procedimientos y deben exigirse las contragarantías de las medidas precautorias.

Artículo 472.- No podrá procederse al remate de bienes muebles o inmuebles, sin que previamente se haya pedido, al Registro Público correspondiente, **una certificación de asientos** o un certificado total de los gravámenes que pesen sobre ellos, **respectivamente**, hasta la fecha en que se ordenó la venta, ni sin que se haya citado a los acreedores que aparezcan en dicho certificado. Si en autos obrare ya otro certificado, sólo se pedirá, al Registro, el relativo al período o períodos que aquél no abarque.

CÓDIGO CIVIL FEDERAL

Artículo 2859.- Se entiende entregada jurídicamente la prenda al acreedor, cuando éste y el deudor convienen en que quede en poder de un tercero, o bien cuando quede en poder del mismo deudor porque así lo haya estipulado con el acreedor o expresamente lo autorice la ley.

Cuando la prenda quede en poder del deudor, para que surta efectos contra tercero debe inscribirse en el **Registro Único de Garantías Mobiliarias**. La inscripción sólo podrá efectuarse si se trata de bienes que sean susceptibles de identificarse de manera indubitable y si conforme al Reglamento del Registro pueden ser materia de inscripción.

El deudor puede usar de la prenda que quede en su poder en los términos que convengan las partes.

Artículo 2981.- Los acreedores hipotecarios y los pignoraticios, no necesitan entrar en concurso para hacer el cobro de sus créditos. Pueden deducir las acciones que les competan en virtud de la hipoteca o de la prenda, en los juicios respectivos, a fin de ser pagados con el valor de los bienes que garanticen sus créditos, **siempre y cuando se encuentren registrados en el Registro correspondiente.**

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL

Artículo 2859.- Se entiende entregada jurídicamente la prenda al acreedor, cuando éste y el deudor convienen en que quede en poder de un tercero, o bien cuando quede en poder del mismo deudor porque así lo haya estipulado con el acreedor o expresamente lo autorice la ley.

Cuando la prenda quede en poder del deudor, para que surta efectos contra tercero debe inscribirse en el **Registro Único de Garantías Mobiliarias**. La inscripción sólo podrá efectuarse si se trata de bienes que sean susceptibles de identificarse de manera indubitable y si conforme al Reglamento del Registro pueden ser materia de inscripción.

El deudor puede usar de la prenda que quede en su poder en los términos que convengan las partes.

Artículo 2981.- Los acreedores hipotecarios y los pignoraticios, no necesitan entrar en concurso para hacer el cobro de sus créditos. Pueden deducir las acciones que les competan en virtud de la hipoteca o de la prenda, en los juicios respectivos, a fin de ser pagados con el valor de los bienes que garanticen sus créditos, **siempre y cuando se encuentren registrados en el Registro correspondiente.**



Anexo B: Análisis del ordenamiento legal para establecer la prelación de créditos *Registro Único de Garantías Mobiliarias (RUG).*

Julio 2014.

Índice

Contexto y contenido del documento	3
Análisis del ordenamiento legal para establecer la prelación de créditos.....	4
Análisis del Código de Comercio.....	4
Análisis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal	4
Análisis de la Ley de Concursos Mercantiles	5
Análisis del Código Fiscal de la Federación	6

Contexto y contenido del documento

El presente documento fue elaborado como parte del Programa de Política Económica para México (PROPEM) el cual es financiado por la Agencia para el Desarrollo Internacional del Gobierno de los Estados Unidos (USAID), y su objetivo es asesorar a instituciones públicas de México en el diseño e implementación de políticas públicas enfocadas a temas económicos con el fin de incrementar la competitividad del país a nivel internacional. En específico el presente reporte corresponde al proyecto “Registro Único de Garantías Mobiliarias (RUG)”, y el cual tiene el objetivo de realizar un análisis de las normas legales y reglamentarias que regulen la ejecución de las garantías mobiliarias, a efecto de poder proponer reformas necesarias para hacer exigible a los jueces, el análisis, registro y verificación de la existencia o no de garantías mobiliarias involucradas en los juicios en trámite, así como su ejecución más eficiente y de observancia obligatoria para el Poder Judicial.

El proyecto fue llevado a cabo a través de un análisis de las eficiencias y deficiencias del RUG mediante entrevistas con el personal del RUG, de la Secretaría de Economía, del Poder Judicial, con abogados especializados en materia de registro de garantías mobiliarias. Posteriormente se llevó a cabo un análisis de todo el ordenamiento legal para definir en qué leyes y/o reglamentos sería necesario establecer la obligación de los jueces de consultar el RUG, obtener un certificado de gravamen y registrar las garantías mobiliarias de los bienes de los juicios de los que sean parte. Por último se realizó un modelo de propuesta de iniciativa de reformas a las leyes y reglamentos para determinar la prelación de créditos, establecer el registro de las garantías mobiliarias y ejecutar las garantías mobiliarias.

El proyecto buscaba llevar a cabo los siguientes productos de trabajo:

1. Reporte con los resultados de las reuniones sostenidas con el personal del RUG, la Secretaría de Economía, abogados especializados, y el Poder Judicial
2. Reporte con las conclusiones de las eficiencias y deficiencias del RUG
3. Reporte con los resultados del análisis de todo el ordenamiento legal para determinar las leyes en las que será necesario establecer la obligación de los jueces de consultar el RUG, obtener un certificado de gravamen, y registrar las registrar garantías sobre bienes muebles que sean parte de juicios de los que tengan conocimiento
4. Reporte con el modelo de propuesta de iniciativa de reformas a los artículos de las leyes y reglamentos en los que será necesario establecer la obligación de los jueces de consultar el RUG, obtener un certificado de gravamen, y registrar las registrar garantías sobre bienes muebles que sean parte de juicios de los que tengan conocimiento
5. Reporte con el modelo de propuesta de iniciativa de reformas a las reglas procesales, a efecto de hacer ejecutables las garantías establecidas sobre bienes muebles, aplicando las garantías constituidas para el pago de acreedores, a efecto de poder recuperar de forma breve los derechos preferentes que tengan las PYMES sobre dichas garantías
 - Anexo A. Análisis del ordenamiento legal para establecer la obligación de los jueces de revisar el RUG
 - Anexo B. Análisis del ordenamiento legal para establecer la prelación de créditos

El presente reporte, titulado *Análisis del ordenamiento legal para establecer la prelación de créditos*, específicamente corresponde al Anexo B arriba mencionado, y complementa y sustenta el modelo de propuesta de iniciativa de reformas para el funcionamiento del RUG (reportes 4 y 5). Este reporte busca llevar a cabo un análisis del ordenamiento legal con el objetivo de establecer la prelación de créditos, el cual sirvió para posteriormente poder desarrollar el modelo de propuesta de iniciativa de reformas.

Análisis del ordenamiento legal para establecer la prelación de créditos

CÓDIGO DE COMERCIO

Artículo 1414 bis 16.- El juez debe presidir la audiencia, ordenar el desahogo de las pruebas admitidas y preparadas, y dar oportunidad a las partes para alegar lo que a su derecho convenga, por escrito o verbalmente, sin necesidad de asentarlo en autos en este último caso. Acto continuo, el juez dictará sentencia, la que será apelable únicamente en efecto devolutivo.

En el caso de que la sentencia sea condenatoria al pago de los créditos vencidos y la obtención de la posesión de los bienes objeto de las garantías otorgadas mediante prenda sin transmisión de posesión o fideicomiso de garantía, el Juez deberá consultaren el Registro Único de Garantías Mobiliarias si existen más acreedores respecto del bien y, en el caso de que si los hubiera, deberán ser convocados para intervenir en el proceso de valuación a que se refiere el artículo 1414 bis de éste Código, pudiendo hacer al juez las observaciones que estimen oportunas para garantizar sus derechos.

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CÍVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL

Artículo 756.- El acreedor hipotecario, el prendario y el que tenga privilegio especial respecto del que no haya habido oposición, así como el que hubiere obtenido sentencia firme, no estará obligado a esperar el resultado final del concurso general, y será pagado con el producto de los bienes afectados a la hipoteca, **prenda** o privilegio, sin perjuicio de obligarlo a dar caución de acreedor de mejor derecho.

Si antes de establecido el derecho de preferencia de algún acreedor, se distribuyera un dividendo, se considerará, como acreedor común, reservándose el precio del bien afectado hasta la concurrencia del importe de su crédito, por si esa preferencia quedase reconocida.

LEY DE CONCURSOS MERCANTILES

Artículo 220.- Son acreedores con privilegio especial todos los que, según el código de comercio o leyes de su materia, tengan privilegio especial o un derecho de retención.

Los acreedores con privilegio especial cobrarán en los mismos términos que los acreedores con garantía real, **siempre y cuando dichos privilegios se encuentren inscritos en el Registro Único de Garantías Mobiliarias**, a no ser que varios de ellos concurrieran sobre una cosa determinada, en cuyo caso se hará la distribución a prorrata sin distinción de fechas, salvo que las leyes dispusieran lo contrario.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

Artículo 149.- El fisco federal tendrá preferencia para recibir el pago de créditos provenientes de ingresos que la Federación debió percibir, con excepción de adeudos garantizados con prenda o hipoteca, de alimentos, de salarios o sueldos devengados en el último año o de indemnizaciones a los trabajadores de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo o con **garantías mobiliarias que estén previamente inscritas en el Registro Único de Garantías Mobiliarias**.

Para que sea aplicable la excepción a que se refiere el párrafo anterior, será requisito indispensable que con anterioridad a la fecha en que surta efectos la notificación del crédito fiscal, las garantías se hayan inscrito en el registro público que corresponda y, respecto de los adeudos por alimentos, que se haya presentado la demanda ante las autoridades competentes.

La vigencia y exigibilidad del crédito cuya preferencia se invoque deberá comprobarse en forma fehaciente al hacerse valer el recurso administrativo.

En ningún caso el fisco federal entrará en los juicios universales. Cuando se inicie juicio de quiebra, suspensión de pagos o de concurso, el juez que conozca del asunto deberá dar aviso a las autoridades fiscales para que, en su caso, hagan exigibles los créditos fiscales a su favor a través del procedimiento administrativo de ejecución.